

4 de Mayo de 2018

Colombia: Asesinato de defensor de derechos humanos, como último ataque en contra del Movimiento Ríos Vivos Antioquia

El 2 de mayo de 2018, el defensor de derechos humanos Hugo Albeiro George Pérez fue asesinado por un individuo no identificado, cuando el defensor se encontraba participando en una protesta pacífica en contra del impacto ambiental que ha generado el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en el departamento de Antioquia, Colombia. El sobrino de defensor, Domar Egidio Zapata George, también fue asesinado.

Hugo Albeiro George Pérez era líder integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Mega-proyectos MASVALE El Aro en Ituango, una de las asociaciones que conforman el [Movimiento Ríos Vivos Antioquia](#) (MRVA). Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) es un movimiento de derechos humanos compuesto por 15 asociaciones y familias de las sub-regiones del Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño, afectadas por el negativo impacto ambiental y de derechos humanos que está teniendo la construcción de Hidroituango, una de las presas hidroeléctricas más grandes de América Latina. El proyecto hidroeléctrico, actualmente en proceso de construcción por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPN), afecta a más de 26 mil hectáreas de tierra y 19 municipios en esa región.

MRVA asegura que en la consecución del proyecto Hidroituango se han llevado a cabo actividades de tala ilegal de árboles y desecho indiscriminado de madera y escombros al Río Cauca, sin considerar el impacto ambiental y la importancia del mismo para cultura, forma de vida y economía de las comunidades campesinas locales, que enfrentan diariamente riesgo de inundaciones o avalanchas que podrían destruir sus hogares y forma de vida. Estas comunidades campesinas han sido marginalizadas y atacadas por varios grupos armados bajo el contexto del conflicto armado interno en el país. Algunos de sus miembros han sido víctimas y/o testigos de desapariciones forzadas, masacres, prácticas de tortura y asesinatos por parte de grupos armados. El proyecto Hidroituango amenaza con inundar gran parte del territorio Antioqueño, donde se han encontrado fosas comunes y cuerpos no identificados que fueron enterrados durante el conflicto, por lo que el proyecto hidroeléctrico puede socavar futuras investigaciones sobre la violencia durante conflicto armado, como parte del Sistema de Justicia Transicional en Colombia.

La protesta llevada a cabo el 2 de mayo de 2018 había sido convocada por las comunidades de la localidad de Puerto Valdivia, quienes expresaban su preocupación por la construcción

de una presa, que se cree puede resultar en la destrucción de las tierras y propiedades aledañas al Río Cauca.

El Proyecto Hidroituango, llevado a cabo por Empresa Públicas de Medellín – EPM, afecta a más de 26 mil hectáreas de tierra y 19 municipios en el departamento de Ituango. No solo el EPM no ha ofrecido ningún tipo de medidas de compensación o reubicación para aquellas personas afectadas por el proyecto, según MRVA la empresa ha violado constantemente sus obligaciones de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por el Estado colombiano.

Debido a las actividades desarrolladas por el Movimiento y las comunidades campesinas que se oponen al impacto ambiental generado por la conducción del proyecto Hidroituango, MRVA ha documentado 152 ataques en contra de sus integrantes, incluyendo el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez. Tres personas han sido asesinadas, dos han sufrido intentos de asesinato, y han habido 63 casos de amenazas y acoso por parte de grupos paramilitares. Igualmente, se han llevado a cabo dos ataques con explosivos y dos casos de tortura, un intento de desaparición forzada, así como 17 casos de difamación a miembros de MRVA, 10 casos de discriminación a personas vinculadas con las actividades de MRVA, y dos casos de acoso.

A pesar de que hay múltiples perpetradores responsables de los ataques en contra de las y los miembros de MRVA, la empresa privada de seguridad de EPM y los grupos armados ilegales que operan en la región representan el mayor riesgo para aquellos que están vinculados al Movimiento. Actualmente, MRVA cuenta con un Plan de Prevención y Protección Colectiva, que fue elaborado conjuntamente con el Ministerio del Interior, en el cual esta entidad se comprometió a adoptar medidas políticas y materiales para garantizar la seguridad de las comunidades en Antioquia. No obstante, dichas medidas no han sido implementadas.

Front Line Defenders condena fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos Hugo Albeiro George Pérez, ya que se cree que su muerte está relacionada con el trabajo que este realizaba en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Front Line Defenders expresa también su preocupación por los riesgos y amenazas que enfrentan los miembros del MRVA diariamente, debido al trabajo que desarrollan por la defensa de los derechos ambientales y de la tierra de las comunidades campesinas en Puerto Valdivia, Antioquia, quienes se han opuesto a la construcción de Hidroituango.

Front Line Defenders urge a las autoridades colombianas a que:

1. Condenen energicamente el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

3. Implementen las medidas políticas y materiales acordadas en el Plan de Prevención y Protección Colectiva de MRVA.
4. Garanticen que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera.

Front Line Defenders Board of Trustees

Denis O'Brien, Noeline Blackwell, Jim Conway, Mary Lawlor, Maria Mulcahy, Kieran Mulvey, Mary Jane Real (Philippines), David Sykes, Arnold Tsunga (Zimbabwe)

Front Line Defenders International Advisory Council

James L. Cavallaro, Maryam Elahi, Michel Forst, Hina Jilani, Maina Kiai

Front Line, The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders trading as Front Line Defenders, is registered in Ireland as a company limited by guarantee and not having a share capital. Registered Office: Second Floor, Grattan House, Temple Road, Blackrock, Co Dublin, A94 FA39, Ireland.

Company No. 593190; Registered Charity No. 20045241; CHY 14029